

**Julio Faesler**

Exembajador de México en la India

juliofelipefaesler@yahoo.com

La relación entre los políticos y empresarios

La SCJN ha comenzado a detener la estrategia que debilita los instrumentos de la democracia.

La tolerancia de la sociedad mexicana por la ausencia de legisladores desleales a sus obligaciones de ser contrapartes de los abusos metaconstitucionales del Ejecutivo es la que a lo largo de los años ha acumulado el saldo de desigualdad. La clase política se dedicó, no a crear una sociedad pujante, unida en lo económico y cultural, sino a perpetuarse en el poder para disfrutar de sus ilimitados privilegios.

La administración del señor licenciado López Obrador insiste en continuar en el siguiente sexenio con su obsesivo programa de la Cuarta Transformación. Todo su esfuerzo se ha dirigido a desmontar las estructuras de los regímenes neoliberales, a los que acusa de haber hundido al pueblo en la miseria, sin porvenir. Así, la próxima administración nos llevará a una etapa más en la dirección de una sociedad que nos nivele a todos. Lo lamentable de su noble programa es escoger un sistema semisocialista de gobierno que no promueve prosperidad y vida digna, sino pobreza y sumisión a un esquema de dictadura personal. Tras cinco años de imposición, AMLO nos deja un país en confusa división, desprestigio internacional, centro de siniestras corrupciones adosadas de tasas de homicidios más altas del mundo.

Arraigado en la total concentración de poder en el Presidente, todo el sexenio ha sido denunciado por su equivocada estrategia de división, pero doscientos años de tradición liberal, más la de un prisma "revolucionario" no se dejan vencer con sólo un ensayo tan palpablemente ineficiente como el de la 4T, que entregó a todos los sectores, sin excepción, un estado de violencia y corrupción jamás conocido. La SCJN ha comenzado a detener la estrategia anticonstitucional consistente en debilitar instrumentos de la democracia que la organizada voluntad ciudadana hace treinta años logró instaurar. Los señores ministros han de seguir su tarea de enmendar los daños que AMLO sistemáticamente infligió instituciones e indispensables servicios sociales populares.

Toca, ahora, enfrentarnos a una crucial elección presidencial en junio de 2024. Muchos de los noventa millones de ciudadanos empadronados esperan que se dé una importante reacción a la intención de AMLO de perpetuar su régimen. El proceso electoral comenzó diferente con las renunciadas anticipadas y eventos que desbaratarán el calendario constitucional. Las campañas de las *corcholatas* distraerán la atención pública del avance en los proyectos prioritarios de AMLO, que se financian con recursos tomados de recónditas e inesperadas fuentes.

Hay signos que AMLO quiere hacer valer. La estabilidad económica y racionalidad financiera, mediante el aprovechamiento

de fondos y fideicomisos, aumento de remesas de compatriotas y recaudaciones extraordinarias, que lo han salvado de crisis presupuestales hábilmente esquivadas. Nada asegura, empero, el respaldo para los indispensables repartos sociales o presupuestos de obra pública inflados. Las inversiones extranjeras seguirán alimentándose no de inversión nueva, sino de reinversiones a veces sólo de papel.

La salud económica del país es problemática en tiempos de inflación. Las cuentas deficitarias del comercio exterior y las fluctuaciones cambiarias se relacionan con el mercado norteamericano, que absorbe 90% de nuestras exportaciones. El valor del peso mexicano determina la competitividad internacional de nuestra producción y la suerte comercial de muchos artículos y el ritmo de creación de empleos formales vía pymes, cuya fuerza influye en nuestra dependencia de inversiones de grandes consorcios internacionales que no tienen lealtades nacionales. Los diferendos con los socios del T-MEC hacen que la mancuerna empresariado, alto y bajo, con el gobierno sea fluida. En semejantes escenarios, México requiere que la actividad de los políticos sea monitoreada por el sector empresarial, a fin de contener sus efectos en términos de los intereses nacionales. La vigilancia es indispensable para evitar situaciones inaceptables. Si el comportamiento de los políticos ha de ceñirse a las normas constitucionales y a los intereses superiores de la nación, la constante evaluación de todos los sectores sociales, laborales y económicos tiene que servir también como referencia desde el punto de vista de la sociedad.

En este sentido, México requiere empresarios firmemente nacionalistas que operen en un ambiente de respeto a los derechos y conscientes de coordinarse con las funciones del Estado. La legitimidad democrática, a través elecciones vigorosas que aseguren autoridades legítimas es central para la seguridad y tranquilidad de todos los actores. La importancia de cuidar lo anterior depende de la participación en los próximos comicios de todos los empadronados, para que de ellos surja un gobierno respetado y confiable, encabezado por una figura presidencial que unifique los esfuerzos nacionales. Complemento de lo anterior, la actuación política y empresarial frente a las transnacionales es de inevitable trascendencia. Esas entidades toman recursos naturales, humanos y de conveniencias de ubicación sin distinguir origen, para integrar sus equipos de trabajo exclusivamente motivados en propósito de lucro. El empresario debe asociarse con ellas sin perder ni su identidad ni valores mexicanos. Se verá, pues, que la patriótica articulación de los políticos supone la que corresponde al empresariado. Nuestro país es un todo indivisible: el sector militar también está obligado: su función es proteger, no matar a inocentes.